

El informe de la CVR ha desatado las iras nada santas de diversos políticos y de algunos de los llamados "líderes de opinión". Tocados por una verdad necesaria aunque dolorosa, ha habido incluso quienes pretenden descalificarla con adjetivos de grueso calibre. Susana Villarán hace en este artículo un recuento de las destempladas y a veces insólitas reacciones de la clase política nacional.

¿Perderá la clase política esta nueva oportunidad?

Y la verdad que hemos encontrado es, también, demasiado estridente y rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano cualquiera pueda alegar ignorancia en su descargo.

SALOMÓN LERNER, discurso del 28 de agosto del 2003

Susana Villarán

El ambiente político se había enrarecido ya un mes antes de que se presentara el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La campaña desatada por el diario *La Razón* contra Javier Ciurlizza, secretario ejecutivo de la CVR, acusándolo sin fundamento alguno de haber negociado con Abimael Guzmán la composición de la CVR durante el gobierno de transición, era parte de una estrategia que incluyó —de manera concertada o no— a representantes de Unidad Nacional, a oficiales en retiro reunidos en la ADOGEN, a algunos voceros del APRA y hasta al propio vicepresidente de Acción Popular.

No resultaba pues sorprendente que estos políticos, claramen-

te identificados con una postura anti-CVR, reaccionasen virulentamente contra el informe final cuando este se presentó el 28 de agosto.

La CVR, hija de una transición marchita

Es bueno recordar que solo dos años antes, en marzo del 2001, los candidatos a la Presidencia de la República Alan García, Lourdes Flores Nano, Alejandro Toledo y Fernando Olivera habían firmado el compromiso de instalar la Comisión de la Verdad de llegar al gobierno.

Reconocían en la "Declaración y compromiso con la verdad de los candidatos a la presidencia del Perú en las elecciones del 2001", que "la violencia política producida

en el país a partir de 1980 y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos provenientes de los grupos terroristas y agentes del Estado, han causado heridas a las víctimas, y también profundas heridas sociales". Se comprometían con la existencia de una Comisión de la Verdad "para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, para atender las necesidades de justicia, no repetición y reparación de las víctimas y sus familiares, así como para asegurar un proceso sólido hacia la transición democrática, la consolidación de la pacificación, la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país y la reconciliación nacional".

El contenido de ese compromiso sirvió de sustento político a la decisión adoptada por Valentín Paniagua, quien en junio del 2001, en un gesto que la historia siempre recordará, creó la Comisión de la Verdad. El decreto supremo de creación de la Comisión contiene básicamente los mismos puntos del acuerdo de marzo, del más alto nivel político suscrito, convirtiéndose en una de las vigas maestras de la transición democrática.



Foto: Imágenes EPENSA

Quien honró su firma fue Alejandro Toledo, al fortalecer la Comisión con la inclusión de cinco integrantes más, y al añadir a su tarea la de propiciar la reconciliación.



Foto: Archivo La República

Al debilitarse la transición democrática en estos dos años, se apagó también el compromiso de los principales partidos democráticos con la Comisión de la Verdad, ahora hija huérfana de la transición.

Las audiencias públicas organizadas por la CVR con los partidos políticos expresaron este cambio, pero dejaron mucho que desear. Quién sabe si el que más desencantó, lamentablemente, fue Valentín Paniagua, el padre de la Comisión de la Verdad, quien en este asunto crucial optó por su identidad de presidente de Acción Popular y dejó de lado la de líder de la transición democrática.



Foto: Archivo La República

Luego de una primera reacción adversa, los principales líderes políticos fueron matizando sus puntos de vista sobre el informe de la CVR.

La responsabilidad de la clase política

"Es penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto de los ciudadanos del Perú para tener el honor de dirigir nuestro Estado y nuestra democracia; quienes juraron hacer cumplir la Constitución que los peruanos se habían dado a sí mismos en ejercicio de su libertad, optaron con demasiada facilidad por ceder a las Fuerzas Armadas esas facultades que la Nación les había dado. De este modo quedaron bajo tutela las instituciones de la recién ganada democracia; se alimentó la impresión de que los principios constitucionales eran ideales nobles pero inadecuados para gobernar a un pueblo al que —en el fondo— se menospreciaba al punto de ignorar su clamor, reiterando la vieja práctica de relegar sus memoriales al lugar al que se ha relegado, a lo largo de nuestra historia, la voz de los humildes: el olvido", señaló Lerner en su discurso de presentación del informe, añadiendo que "tanta muerte y tanto sufrimiento no se pueden acumular simplemente por el funcionamiento ciego de una institución o de una organización. Se

necesita, como complemento, la complicidad o al menos la anuencia de quienes tienen autoridad y por lo tanto facultades para evitar una desgracia. La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes explicaciones que dar al Perú".

Lerner finalizó su reflexión sobre la clase política expresando: "Hemos reconstruido esta historia y hemos llegado al convencimiento de que ella no hubiera sido tan grave si no fuera por la indiferencia, la pasividad o la simple ineptitud de quienes entonces ocuparon los más altos cargos públicos. Este informe señala, pues, las responsabilidades de esa clase política que, debemos recordarlo, no ha realizado todavía una debida asunción de sus culpas en la desgracia de los compatriotas a los que quisieron, y tal vez quieran todavía, gobernar".

Atacan al mensajero, se callan sobre el mensaje

La crítica iba al corazón. Por ello, ese mediodía del 28 de agosto voceros de los principales partidos políticos, especialmente aquellos que fueron

responsables del gobierno y del Congreso de la República durante las dos décadas sometidas al escrutinio de la CVR, reaccionaron como impulsados por un resorte. No se había aún acallado en Palacio de Gobierno el eco de las lúcidas y enérgicas palabras del presidente de la Comisión al entregar los nueve tomos del informe final al Presidente de la República, y ya en el Congreso de la República y en los medios de comunicación, voceros calificados de los partidos políticos reaccionaban furiosamente algunos, moderadamente otros, criticando o descalificando el informe y el trabajo de la Comisión.

Martha Chávez y Luz Salgado salieron en defensa del ciudadano japonés, criticando agriamente a la Comisión. El congresista de Unidad Nacional Xavier Barrón expresó que "estaba apenado de que se haya gastado tanto dinero en un informe absolutamente deleznable por parcializado". Rafael Rey, de la misma agrupación, continuó en la línea de demolición que había iniciado desde un mes antes: "El Perú ha gastado unos trece millones de dólares para insultar y maltratar a los soldados y policías que nos defendieron del terrorismo... Qué mal han entendido lo que pasó en el Perú. Carlos Tapia, Sofía Macher, Enrique Bernales y Carlos Iván Degregori han sido marxistas y han hablado a favor de la lucha armada y la rebelión de las

Quién sabe si el que más desencantó, lamentablemente, fue Valentín Paniagua, el padre de la Comisión de la Verdad, quien en este asunto crucial optó por su identidad de presidente de Acción Popular y dejó de lado la de líder de la transición democrática.

masas. Y ahora se convierten en jueces".

Luis Castañeda Lossio, alcalde metropolitano, de la misma agrupación, sostuvo sin pestañear que los recursos asignados a la CVR habrían sido mejor utilizados para hacer obras en Lima.

En las filas de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde se paseó por sets y estudios de radio para denostar el trabajo de la CVR. Su presidente, Valentín Paniagua, declaraba que las conclusiones de la CVR no tenían carácter vinculante. Mauricio Mulder y Luis Gonzales Posada, del APRA, atacaron con fuerza. Alan García, aliviado al interpretar que la CVR no hallaba en él responsabilidades penales, señalaba que su gobierno "contribuyó decisivamente a la derrota de la subversión. El documento no me agravia ni ofende, ni imputa responsabilidades penales", dijo. Sin embargo, tomó distancia considerando "arriesgado que la CVR haya inflado, mediante juegos probabilísticos, el número de personas que murieron". Su serena respuesta contrastaba con la virulencia con la que sus militantes se manifestaban contra la CVR en la Plaza de Armas de Huamaga, en momentos en que Salomón Lerner hacía entrega del informe a la Nación, y con las pintas que agredían a la CVR del ex congresista Abdón Vilchez en Huancayo.

La serena respuesta de Alan García contrastaba con la virulencia con la que sus militantes se manifestaban contra la CVR en la Plaza de Armas de Huamaga.

Marciano Rengifo, militar en retiro del partido de gobierno, rompió lanzas contra la CVR porque esta ha señalado las responsabilidades que tendrían miembros de las Fuerzas Armadas por la violación de derechos humanos, mientras que Wálter Alejos, congresista ayacuchano de Perú Posible, decía: "Veo todo esto con mucho optimismo. Por fin los deudos de la violencia podrán respirar tranquilos, porque realmente se han descubierto los hilos de la verdad. Esperemos que con ello el Perú se reconcilie. Quienes señalan que las cifras son sobredimensionadas no han vivido el terror".

En los predios del FIM, aliado de Perú Posible, mientras Heriberto Benítez sostenía que la CVR "ha puesto el dedo en la llaga y mostrado la cruel realidad que sufrió el Perú por la violencia cometida por terroristas y agentes del Estado", Luis Iberico, presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, decía que le parecía "peligroso afirmar que hubo un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Hubo casos, pero decir que las Fuerzas Armadas

y la Policía utilizaron el asesinato, la tortura y el secuestro como una práctica cotidiana me parece sumamente delicado e injusto". Entretanto, un desconocido congresista de esa agrupación expresó en un programa radial que arrasaría con cien comunidades para derrotar al terrorismo.

Marcando la diferencia, los congresistas de Somos Perú y Perú Ahora expresaron su respaldo al informe. Y Javier Diez Canseco, de la izquierda, expresó: "Saber la verdad es doloroso, negarla es una enfermedad. Yo no quiero negarla. Prefiero el dolor de conocerla y poder procesarla".

A medida que pasaban los días, las posiciones se fueron atemperando. Los dirigentes del APRA Alan García y Jorge del Castillo, la presidenta de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano, y Valentín Paniagua, de Acción Popular, fueron matizando puntos de vista, tomando distancia de sus escuderos más febriles, entrando en retiro para estudiar en profundidad el extenso e incómodo informe.

El APRA y la Comisión de la

Al momento de redactar el artículo que acompaña este recuadro, Susana Villarán conversó con Jorge del Castillo para recabar sus opiniones respecto de la posición del Partido Aprista acerca del informe final de la CVR. El congresista Del Castillo envió entonces el texto que presentamos a continuación.

En primer término, el Partido Aprista expresa su reconocimiento a la Comisión de la Verdad y Reconciliación por el importante trabajo que ha realizado y que merece el más exhaustivo análisis, dado que constituye no solo una visión del pasado sino fundamentalmente una proyección de futuro que los partidos políticos democráticos debemos observar con alta responsabilidad.

El primer elemento de análisis que tuvimos el mismo día 28 de agosto fue el discurso del doctor Salomón Lerner en Palacio de Gobierno, que a nuestro juicio tuvo algunos aspectos controvertidos como no utilizar la denominación terroristas para los miembros de Sendero Luminoso y aparentemente colocar en un plano de igualdad a estos con las Fuerzas Armadas, a las que se les asignó una práctica sistemática y generalizada de violación de derechos humanos; así como el hecho de generalizar la calificación de la clase política.

Igualmente, plantear como una cifra oficial 69.280 víctimas caídas durante este proceso es uno de los puntos de controversia, materia

de esclarecimiento, pues es el resultado de una proyección estadística, cuya metodología debe ser debidamente explicada por la Comisión a la ciudadanía.

Al día siguiente, en la ciudad de Ayacucho, el discurso del doctor Lerner tuvo una importante evolución: definió con claridad como terroristas a la organización senderista y se acercó más a lo que decía el propio texto del informe.

A cinco días de su emisión, el APRA continúa estudiando el informe final con analistas inclusive no apristas que nos permitan obtener un mejor ángulo de observación de los resultados. En los próximos días emitiremos un informe más amplio y profundo.

Sin embargo, de la lectura podemos constatar la dura realidad de un sector importante de la población que se encuentra marginado y excluido, como es el campesinado quechuahablante, cuyo sufrimiento no fue tomado en cuenta con la profundidad debida por el resto de peruanos. Este es un punto central que obliga al Partido a mirar directamente el

De autocrítica, nada

El director de *Perú.21* editorializó el sábado 30 de agosto: "La incapacidad de nuestros líderes políticos para efectuar una autocrítica honesta respecto de su responsabilidad en el holocausto producido en el país, cabalmente reflejada en el informe de la CVR, lleva a prever un futuro pesimista,

en el que no se podrá avanzar en el proceso de reconciliación nacional propuesto a partir de la superación de prácticas de discriminación. Una reconciliación pendiente es la de nuestros políticos con el país".

Otro diario de circulación nacional sostuvo en su página editorial, con acierto:

"La clase política pierde la oportunidad histórica de disculparse con el país".

Los cargos son serios; entre ellos, la abdicación del poder civil frente a las Fuerzas Armadas y la indolencia frente a las violaciones de los derechos humanos, hechos vinculados a una población lejana de la Plaza de Armas y

Verdad y Reconciliación

Jorge del Castillo Gálvez

problema de la población rural y darle toda la prioridad en su atención, para incorporarlo como fuerza productiva del país, con pleno respeto de sus derechos.

Al analizar las conclusiones referidas al gobierno aprista, consideramos importante que la Comisión haya reconocido que el régimen ejecutó una política de desarrollo social que tuvo como resultado inmediato la reducción de la violencia en dichos lugares. Programas como el crédito cero, los Rimanakuy, el PAIT urbano y rural y la acción política y social en el campo puestas en práctica a partir de 1985 fueron fundamentales. Junto a ello, otras acciones políticas como la formación de la Comisión de Paz, la unificación de las Fuerzas Policiales, la creación del Ministerio de Defensa, la DOES y el GEIN en el Ministerio del Interior fueron pasos importantes para afirmar el poder civil sobre el militar; pero la misma Comisión precisa que fueron otros elementos, como la crisis económica, los que debilitaron hacia la última fase del gobierno aprista estos importantes cambios.

También resulta trascendente el reconocimiento que la Comisión hace de las más de mil víctimas del aprismo, asesinados por Sendero

Luminoso como consecuencia de una implacable campaña de crímenes selectivos.

La Comisión también reconoce que el gobierno del presidente Alan García, no obstante el clima de violencia existente, supo mantener el orden democrático, amagado por un intento de golpe militar; la realización de elecciones generales y municipales y el pleno respeto de la libertad de expresión. La Comisión no ha determinado que existan elementos para imputar responsabilidad penal al presidente Alan García por los sucesos de los penales, conclusión sumamente importante, al no haberse caído en el juego de quienes querían usar las conclusiones de la CVR con fines electorales.

La Comisión ha definido que el gobierno aprista tiene una responsabilidad política; como tal, el análisis que estamos haciendo es precisamente para evaluar cómo se asimila este concepto y cómo nos proyectamos a futuro en una auténtica ruta de reconciliación. El APRA, como partido responsable, no actúa con irracionalidad sino toma muy en cuenta las conclusiones de la Comisión de la Verdad para evitar que procesos como el que hemos vivido se repitan y para que la justicia social constituya un baluarte de la democracia y del Estado de derecho contra la subversión.

al hemiciclo del Congreso, situaciones de violencia que se abatían sobre ese país quechua, indio y selvático, secularmente excluido, en el que el Estado prácticamente no existía. "Enviaron a los cholos a combatir a los cholos", expresó ácidamente Augusto Álvarez Rodrich en un programa de televisión.

El informe de la CVR apunta a la raíz, a la ausencia de una verdadera democratización de la política, a la falta de convicción de la llamada clase política en un verdadero Estado de derecho, a esa vieja cultura política discriminadora y elitista que construía un Estado y a sus propios partidos de espaldas

a la sociedad que reclamaba y reclama aún protección, inclusión, justicia y amparo.

La brecha entre el Perú real y el Perú oficial se ahonda, y los partidos políticos democráticos que se ponen de perfil o atacan el informe de la CVR pueden perder, otra vez, su oportunidad. ▲